

Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermiano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia, continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

PRIMERA SECCION.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 185.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del Reino en despacho telegráfico, recibido el 25 del actual á las cuatro horas y cuarenta y siete minutos de la tarde, me dice lo siguiente:

«Campamento del Serrallo 24 de marzo.

Continúan en las alturas á nuestra vista unos 100 moros, al parecer en observación de estas fuerzas.

La salud satisfactoria.

«Campamento de Gualdrás 24 de marzo.

El ejército se ha detenido en este punto para desembarazarse de los heridos y enfermos, y reponerse de municiones.

Nuestras pérdidas se calculan de 40 á 50 muertos y 600 heridos.

La del enemigo considerable, porque ha defendido tenazmente y á cuerpo descubierto sus posiciones, y el campo se ha visto cubierto de cadáveres y heridos.

Mañana al amanecer continúa la marcha en dirección al Fouak.

Lo que se inserta en este periódico oficial para su debida publicidad.

Orense marzo 25 de 1860.—El Gobernador, Hermenegildo Guzmán.

Número 185.

En la Gaceta de Madrid número 55 del viernes 21 de febrero último se lee lo siguiente:

Real orden dirigida al Gobernador civil de la provincia de Lérida, concediendo los recargos extraordinarios sobre las contribuciones territorial é industrial, propuestos por los Ayuntamientos de varios pueblos de aquella provincia, y dictando reglas para el caso en que después de hacer uso de todos los recursos posibles quede un déficit en los presupuestos municipales.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Administración.—Negociado 2.º

El Sr. Ministro de la Gobernación ha dirigido con esta fecha al Gobernador de la provincia de Lérida la siguiente Real orden:

«En vista de las propuestas de recargos extraordinarios que para cubrir el déficit de sus presupuestos municipales del corriente año hacen los Ayuntamientos de los pueblos que expresa la adjunta relación, la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien concederles los recargos que se señalan respectivamente á cada uno sobre las contribuciones territorial é industrial, con arreglo al máximo fijado por el Consejo de Ministros en observancia del artículo 28 de la Real orden de 30 de julio último, por cuya razón han sido limitados al 30 y 25 por 100 los recargos solicitados con mayor tipo. Al propio tiempo, y considerando que por efecto de esta reducción ha de quedar sin cubrir por completo el déficit en algunos de dichos presupuestos, resultando además en muchos de ellos un gran descuberto, sin que para llenarlo ó extinguirlo se proponga medio alguno, S. M. se ha servido resolver, en atención á que no puede traspasarse el límite de recargos anteriormente citado, que excite V. S. el celo de los Ayuntamientos á fin de que amplíen sus propuestas con aquellos arbitrios especiales que crean mas convenientes, haciendo uso de la tarifa núm. 2.º de la contribución de consumos, á cuyo medio pueden recurrir según el art. 23 de la mencionada Real orden; en la inteligencia de que si después de agotados todos los recursos extraordinarios que la legislación vigente sobre arbitrios pone á disposición de las Municipalidades con el expresado objeto, resultasen todavía descubiertos por falta de medios á que apelar, justificado este extremo, procederá V. S. á castigar nuevamente los presupuestos en que aquellos aparecen, haciendo en sus créditos las

rebajas oportunas, principalmente en los referentes al capítulo de Instrucción pública, cuyos crecidos gastos manifiesta V. S. no poder soportar la mayor parte de los pueblos, de modo que no se comprendan por ningún concepto en el presupuesto mas obligaciones que las que puedan ser satisfechas con los ingresos probables, tanto ordinarios como extraordinarios, según exige una buena administración económica; participando V. S. á este Ministerio las atenciones de Instrucción pública que se queden sin cubrir, á fin de ponerlo en conocimiento del Gobierno para que adopte la disposición que estime oportuna.

Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, traslado á V. S. para su conocimiento y á fin de que haga aplicación de las prescripciones de dicha Real orden en los casos análogos que puedan ocurrir en esa provincia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de febrero de 1860. El Subsecretario, Juan de Lorenzana.—Señor Gobernador de la provincia de...

Número 186.

En la Gaceta de Madrid núm. 74 del jueves 14 de actual se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Administración.—Negociado 6.º

Excmo. Sr.: Remitido á informe de las Secciones de Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente sobre si es ó no necesaria la autorización del Gobernador de la provincia de Lérida al juez de primera instancia de Solsona para procesar á Don Joaquín Graus, Alcalde de la cárcel de dicho punto, por el permiso ó tolerancia en la salida de un delincuente constituido en prisión, han consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el juez de primera instancia de Solsona pidió al Gobernador de la provincia autorización para procesar á D. Joaquín Graus, Alcalde de las cárceles de dicha ciudad:

Resulta que D. Jaime Mas, cabo de la escuadra de Solsona, compareció ante el juzgado manifestando que por Francisco Riba, individuo de la de su mando, se le había presentado un preso que aprehendió en una de las calles de aquella ciudad, á quien tenía detenido en su casa y á disposición del mismo Juzgado:

Que instruidas diligencias sobre este hecho, y entregado dicho preso al Alcalde de las cárceles, se recibió declaración al citado Riba, quien dijo que estando en la plaza de San Juan de aquella ciudad vió el preso de las cárceles de la misma, llamado Juan Pedro Sola, que llenaba unos cántaros en la fuente de dicha plaza, á quien prendió y puso á disposición del citado cabo en cumplimiento de las órdenes que este le tenía comunicadas:

Que recibida declaración al referido Sola, manifestó que salió de la cárcel por mandato de la mujer del Alcalde y en el objeto de llevar agua para los demás presos, habiéndole constituido en prisión un mozo de la escuadra en el acto de estar llenando los cántaros en la fuente; que el motivo de hallarse preso era por la causa seguida en dicho juzgado por muerte dada á Francisco Soler, la que se encontraba pendiente de consulta en la Audiencia del territorio, y por la que fue condenado á 15 años de reclusión; y que hacia como unos quince días que estaba fuera del calabozo cuando la mujer del Alcalde le mandó ir por agua, cuya operación había practicado otras veces:

Que evacuada la cita referente á la mujer del Alcalde, expresó ser en un todo exacta; y que el Juez, oído el Promotor fiscal, dictó auto inhibiéndose del curso de la causa y que pasase al Alcalde de dicha ciudad para que adoptase gubernativamente las medidas que estimase oportunas, cuyo auto se dejó sin efecto por la Audiencia á quien se consultó, mandando se ampliase el sumario y se siguiese la causa hasta su terminación con arreglo á derecho:

Que practicadas nuevas diligencias por el Juzgado, se hizo constar haberse pasado al Alcalde el correspondiente mandamiento de prisión relativo al citado Sola, y que tratando de averiguar si aquel había recibido alguna remuneración por dejar libremente á este en las Casas consistoriales, en donde se encuentra la cárcel, todos los testigos á quienes se examinaron dijeron que lo ignoraban, si bien la mujer del Alcalde manifestó que el motivo de haber sacado su esposo del calabozo á Sola fue morido de compasión por estar este enfermo y además quebrado, circunstancia que se justificó por declaración de dos facultativos que le reconocieron:

Que el Juez en vista de dichas diligencias y oído el Promotor fiscal, dictó nuevo auto inhibiéndose del curso de la causa, mandando pasase al Alcalde de Solsona para que adoptase las medidas que estimase convenientes, toda vez que no re-

sultaba hecho alguno punible con arreglo al Código penal; cuyo auto volvió á dejarse sin efecto por la Superioridad, mandando se desistiese la causa al Juez para que cumpliera con lo prevenido en su providencia anterior;

Que el Juez, oído de nuevo al promotor fiscal, pidió autorización al Gobernador para procesar al Alcalde, la que le fue negada previo informe del Consejo provincial;

Visto el art. 67 del reglamento de juzgados de 1.º de mayo de 1844, conforme al cual los Alcaldes son responsables con su persona y bienes de la custodia de los presos; y por lo que hace al cuidado, tratamiento y departamento en que los deba tener, son dependientes de los jueces;

Vista la ley de prisiones de 26 de julio de 1849, y particularmente su art. 17, en que se dispone que los Alcaldes de los depósitos municipales y cárceles cumplan los mandamientos y providencias de los Tribunales y Jueces respectivos en lo concerniente á la custodia, comunicación y soltura de los presos con causa pendiente;

Considerando que los Alcaldes tienen el doble carácter de agentes de la Administración, y dependientes de la autoridad judicial, y que en este caso se encuentran en todo lo relativo á la custodia de los presos que los Tribunales ponen á su cuidado, y por consiguiente en cuanto á la prisión, incomunicación y soltura de los presos con causa pendiente, no obran en el ejercicio de funciones administrativas;

Considerando que el citado Alcalde Don Joaquín Graus faltó á la dispuesto en el art. 17 de la ley de prisiones de 26 de julio de 1849, permitiendo ó tolerando que Juan Pedro Sola saliese de la prisión en que estaba constituido por mandamiento del Juez y hallándose pendiente de causa, y que en tal concepto obró como dependiente del juzgado, á quien compete la corrección ó castigo que por ello deba imponersele;

Las Secciones opinan que se declare innecesaria la autorización para procesar á dicho Alcalde.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de febrero de 1860.—Posada Herrera.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Remitido á informe de las Secciones de Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de Hacienda de la capital para procesar á D. Francisco Quintana y D. Francisco Javier Ayensa, Administrador de Rentas que fueron de la Puebla del Carmital, por suponerles delito de connivencia en contrabando y defraudación, han consultado lo siguiente:

«Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el Juez de Hacienda de la Coruña solicitó del Gobernador de la provincia autorización para procesar á D. Francisco Quintana y Don Francisco Javier Ayensa, Administrador de Rentas que fueron de la Puebla del Carmital;

Resulta: Que según causa criminal contra los industriales de la Puebla dedicados á la salazón del pescado, por haber destinado la sal de Torrevieja á otra pesca distinta del jurel, fueron absueltos libremente por sentencia que causó ejecutoria, dictada por la Audiencia del territorio, mandando que indemnizasen aquellos á la Hacienda de cierta cantidad;

Que entre otros considerandos contenidos en dicha sentencia, decía uno de ellos: «que si bien era cierto habían sido procesados los citados Administradores

con separación de los industriales sobre abono en la existencia de sales en los alfolíes de la Puebla, cuya causa terminó por sententia ejecutoriada, debía tenerse presente que la infracción de la orden de 1848 producía distintas responsabilidades, y debía ser objeto de un nuevo procedimiento para hacerlas efectivas en el caso de que resultasen comprobadas; mandando en su consecuencia que se repusiese aquella causa al estado sumario, y se continuasen contra dichos Administradores con arreglo á derecho;

Que el Juez, en vista de lo dispuesto por la Audiencia y oído el Promotor fiscal, pidió al Gobernador autorización para procesar á los citados Administradores, la que le fue negada previo informe del Consejo provincial;

Que del testimonio de las actuaciones remitido al Gobernador, al solicitar dicha autorización, aparece por declaración del referido Quintana que en el tiempo que fué Administrador de la Puebla mezclaba en los días que concurría al despacho la sal en la proporción de tres partes de la de Cádiz y una de la de Torrevieja, ignorando si abusaban los industriales de este beneficio, lo cual debía resultar al liquidar adoptándose entonces las medidas oportunas para descubrir cualquier fraude que cometiesen; que según el mismo testimonio, dijo en su declaración el citado Ayensa que desde el año 1841 que entró á servir la Administración de la Puebla, siempre dió á los industriales para toda clase de pesca la sal que le pedían, ya fuese de Cádiz ó de Alicante, en virtud de las instrucciones de Hacienda y de la orden de la Dirección de Estancadas que en dicho año de 1841 obtuvieron aquellos;

Que habiendo cesado en aquel destino á últimos de 1842 y vuelto á desempeñarle en 1843, no quiso suministrar á los industriales sal de Alicante porque sabía la repugnaba la Administración de provincia, aunque esta no le comunicó orden alguna prohibiéndoselo, lo cual dió margen á que los industriales acudiesen á la Dirección de Estancadas reclamando el cumplimiento de la orden de 1841, cuya queja tuvo por resultado la orden de 1848, desde la que facilitó á aquellos sal de Alicante, mezclada con la de Cádiz, en la proporción aquella de una cuarta ó quinta parte, ignorando el uso que habían de hacer de ella como igualmente los industriales, pues siempre pedían la sal antes de hacerse la pesca; no siéndole posible vigilar el destino que de ella hiciesen, porque para esto era preciso constituirse á un mismo tiempo en mas de 50 fábricas que tiene el distrito en diferentes puntos, si bien cuando se liquidase con los industriales, pues hasta entonces no se había hecho por no haber consumido sus existencias, se les cargaba la diferencia de precio en la sal de Alicante no destinada á la pesca del jurel;

Que en dicho testimonio aparece la orden de 27 de agosto de 1841 de que se hizo mención, expedida por la Dirección de Rentas estancadas y comunicada al Intendente de la Coruña, por la que se dispuso que á dichos industriales se les dió de la sal de la fábrica que lo pidiesen, según estaba concedido por Real decreto de 21 de agosto de 1828 é instrucción de 31 de diciembre del mismo año;

Que igualmente aparece la citada orden de 7 de diciembre de 1848 expedida por dicha Dirección y comunicada en la misma forma, en la que sin prejuzgar la cuestión pendiente sobre el particular, que debería resolverse en el expediente general que se instruya, y con la calidad de por ahora, se mandó que se conceptuase subsistente la referida orden de 1841 solo para la salazón del jurel, y que la sal de Torrevieja se mezclase con la de San Fernando al tiempo de entregar á los industriales la que recibieran para el indicado objeto;

Visto el Real decreto de 21 de agosto de 1828 y la instrucción de 31 de diciembre del mismo año para su ejecución que facilitan á los industriales ó empresarios de establecimientos de pesca y salazón para hacer pedidos de la sal que les concuerda, la que debían facilitarles las dependencias encargadas de su expendición;

Vista la orden de 27 de agosto de 1841 expedida por la Dirección de Rentas estancadas, por la que se dispuso que á los industriales de que se hizo mérito se les diese la sal de la fábrica que lo pidiesen, según les estaba concedido en el Real decreto de 21 de agosto de 1828 é instrucción de 31 de diciembre del mismo año, cuyas disposiciones se citan;

Vista la orden de la misma Dirección de 7 de diciembre de 1848, por la que se mandó con la calidad de por ahora é interin se resolviera el expediente general que se instruya al efecto, que se conceptuase subsistente la citada orden de 1841 solo para la salazón del jurel, y que la sal de Torrevieja se mezclase con la de San Fernando al tiempo de entregar á los industriales la que pidiesen para el indicado objeto;

Vistos los artículos 65 al 75 de la ley penal de 3 de mayo de 1850, que regía como tal en la época á que se refieren los hechos que dieron margen á este expediente, y que clasifican los delitos de connivencia de los empleados de Hacienda en el contrabando y defraudación, entre los que no se comprende el caso en que se encuentran los expresados Administradores;

Considerando que estos funcionarios cumplieron con su deber entregando á los industriales la sal de la fábrica que les pidieron según disponían el citado Real decreto de 21 de agosto de 1828 é instrucción para llevarlo á efecto de 31 de diciembre del mismo año, y que desde que fue dictada la referida orden por la Dirección general de estancadas en 1848 mezclaron la sal de Torrevieja con la de San Fernando al entregarla á los industriales, con arreglo á lo dispuesto en la misma;

Considerando que si bien los industriales usaron indistintamente de la sal mezclada para toda clase de pesca, sin limitarse á la del jurel á que debían destinarse según la orden de 1848, este abuso no debe hacerse extensivo á los citados Administradores, toda vez que no habiendo liquidado con aquellos no pudieron descubrir el fraude ni cargarles la diferencia de precio en la sal destinada á otra pesca distinta del jurel;

Considerando que habiéndose practicado posteriormente en 1850 la oportuna liquidación á instancia de los industriales, resultó de la misma que estos habían tenido de beneficio para por 100 en usar la sal de Torrevieja para la pesca en general, cuya diferencia se mandó abonar por la sentencia que recayó en la causa seguida contra los mismos, subsistiendo en esta forma el perjuicio ocasionado al Estado;

Considerando que para calificarse de delitos de connivencia en el contrabando ó defraudación las omisiones y abusos de los empleados en el ejercicio de sus cargos, es indispensable que fallen á las obligaciones que les impongan los reglamentos ó disposiciones especiales de sus superiores, según se dispone en el citado artículo 66 de la ley penal, en cuyo caso no se encuentran dichos Administradores, pues que á su vez cumplieron con lo preceptado en el Real decreto de 21 de agosto de 1828 é instrucción para llevarlo á efecto de 31 de diciembre del mismo año, como también con lo mandado en las citadas órdenes de la Dirección de Estancadas de 27 de agosto de 1841 y 7 de diciembre de 1848, no siendo posible descubrir el abuso que cometían los industriales hasta que practicada la oportuna liquidación, cuyo caso aun no había llegado por no haber con-

sumido las sales que pidieron para destinarlas á sus industrias;

«Las Secciones opinan que debe confirmarse la negativa del Gobernador de la Coruña.»

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de febrero de 1860.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de la Coruña.

Remitido á informe de las Secciones de Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Nájera para procesar á D. Damaso Acevedo, Alcalde de Cenicero, por suponersele abusos en el ejercicio de su cargo, han consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el expediente en virtud del que el Gobernador de la provincia de Logroño ha negado al Juez de primera instancia de Nájera la autorización que solicitó para procesar al Alcalde de Cenicero D. Damaso Acevedo;

Resulta: Que el Alcalde de Urnuéla denunció al juzgado el hecho de que el Alcalde de Cenicero se había presentado con dos hombres armados en el término de Carrera, comunero de idem con Nájera, Huércanos y Cenicero, flexándose consigo á dos guardas de viñas puestos por vecinos de Urnuéla;

Que trasando el Juzgado ante todo de ventilar la cuestión de jurisdicción del Alcalde de Cenicero en el terreno donde se ejercía para deducir si había obrado ó no legítimamente, dió completo crédito á una certificación del Secretario de Nájera de la que, y de una sentencia que en copia la acompaña, deduce que dicho terreno pertenece á esta mencionada ciudad;

Que en su consecuencia pidió el Juez la autorización de que se trata, y el Gobernador la denegó fundándose de acuerdo con el Consejo provincial, en que no está justificado que el término en que se cometió el supuesto abuso pertenezca á otra jurisdicción que la en que ejerce mandando el Alcalde de Cenicero, y por el contrario conste que es terreno común, por lo que procede que conozcan preventivamente unos y otros Alcaldes de los pueblos en tal equidad interesados;

Considerando: 1.º Que en efecto, lo que realmente hay en el fondo de este negocio es una cuestión de términos jurisdiccionales en pueblos que se suponen comuneros en el terreno en que se cometió el supuesto abuso, entendiéndolo así el Alcalde acusado, el que lo acusó, el Consejo provincial y el Gobernador de la provincia, y no diciendo claramente otra cosa en contrario la sentencia que se ha tenido á la vista;

2.º Que no puede resolverse ahora en virtud de las actuaciones hasta aquí practicadas esta importante cuestión de términos jurisdiccionales, y que sería resolverla declarar la culpabilidad ó inocencia del Alcalde, que no ha de resultar según el mismo juzgado, del hecho que se le imputa apreciado aisladamente, sino en cuanto haya tenido ó no lugar en terreno de su jurisdicción;

Las Secciones opinan que debe confirmarse la negativa acordada por el Gobernador de Logroño, y lo acordado.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de febrero de 1860.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Logroño.

SEGUNDA SECCION.

Circular Núm. 187.

Seccion de Administracion.—Negociado de Hacienda.

Circular de la Direccion general dictando reglas para la formacion de los presupuestos adicionales, provinciales y municipales.

El Ilmo. Sr. Director general de Administracion local con fecha 12 del corriente me dice lo que sigue.

La formacion de los presupuestos adicionales que han de remitir, así los Ayuntamientos como las provincias antes del 1.º de junio de cada año para que sean refundidos en los ordinarios aprobados, requiere por parte del V. S. un examen detenido si han de ser fielmente interpretadas y cumplidas las disposiciones que comprende acerca de esta materia la Real orden circular de 30 de julio de 1859 en sus ocho artículos sucesivos, desde el 1.º al 19 inclusive.

Facil es de estimar la importancia de estos presupuestos adicionales, que comprenden en primer lugar las resultas que quedan de cada presupuesto cuando se cierran sus pagos, proporcionando el enlace de las obligaciones del ejercicio anterior con las del ejercicio actual, y contienen en segundo lugar los créditos de carácter suplementario que exigen los gastos no previstos por cualquier motivo al formarse los ordinarios que se están ejerciendo.

La Direccion, aunque está segura del ilustrado celo de V. S. y de que dará toda la importancia que merece al servicio de que se trata, cercano como está el plazo de la formacion de los presupuestos adicionales correspondientes a 1860, no puede menos de exponer a su consideracion algunas observaciones, y de dictar algunas medidas que juzga convenientes acerca de esta materia, en uso de sus facultades ordinarias y de las especiales que le concede el art. 39 de la Real orden de 30 de julio antes citada.

Dos son los puntos esenciales que, á juicio de la Direccion, reclaman la atencion de V. S. al formar los presupuestos adicionales: la exactitud de la liquidacion que ha de producir las resultas destinadas á figurar en ellos, en primer término, y la prevision necesaria para que comprendan de una vez todos los gastos del año nuevos ó imprevistos hasta entonces.

Acercado al primer punto debe recordar V. S. que el art. 12 de la Real orden de 30 de julio previene que los pagos por cuenta del presupuesto vencido en 31 de diciembre no se cierran en esta fecha, como antes se hacia, siguiendo una practica viciosa que solia crear conflictos á las corporaciones y amenazar á las veces su crédito. Ahora, en virtud de aquella nueva disposicion, todos los servicios contratados y obligaciones cumplidas dentro del año transcurrido y de los créditos aprobados, pueden y deben satisfacerse durante el período de tres meses de ampliacion abierto para los pagos, hasta que en 31 de marzo se cierran estos definitivamente, y se forma una liquidacion general de los gastos y otra de los ingresos, así en los presupuestos municipales como en los provinciales, con el fin de que las resultas de estas dos liquidaciones constituyan las primeras partidas de ingresos y gastos de los presupuestos adicionales. Por los modelos de ambas liquidaciones, provincial y municipal, comprenderá V. S. facilmente los detalles, y con el objeto de hacer aún mas sencilla su tarea, la Direccion cree conveniente remitirle adjunto un número suficiente de ejemplares, para que tanto los Ayuntamientos como en las oficinas del Gobierno de provincia, se llenen sus casillas y se cumpla desde luego con exactitud y uniformidad este servicio. Pero las ventajas del período de ampliacion, la claridad de las liquidaciones, la exactitud de las resultas que han de formar las primeras par-

tidas de los adicionales, no podran obtenerse sin que la cuenta adicional de recaudacion y de pagos, que reclama la ejecucion de una reforma tan importante en la contabilidad municipal y provincial, se leve de una manera conveniente; y por lo mismo remitiré tambien á V. S. las instrucciones y los modelos necesarios para procurar desde ahora, en cuanto sea posible, y preparar en la futura ampliacion del actual presupuesto, el completo planteamiento del nuevo sistema. Lo que desde luego debe disponer V. S. es que la cuenta adicional que en esta ó la otra forma ha debido llevarse por los tres meses de ampliacion que están corriendo, se una á la general del presupuesto de que procede, y convenga tambien que V. S. haga unir á esta cuenta adicional copias de las liquidaciones de gastos é ingresos y del certificado del acta de arqueo que ha de celebrarse en 31 de marzo, después de cerrados los pagos en todas las depositarias de ayuntamiento y de provincia. Nada se altera, por lo demás, respecto de la formacion de las cuentas, limitandose el propósito de la Direccion á armonizar la adicional con la general que hasta aqui se ha rendido.

Acercado al segundo punto apenas podria encarecer bastante á V. S. la necesidad de que se observe rigurosamente el art. 14 de la mencionada Real orden de 30 de julio, el cual tiene á evitar que se alteren las partidas de los presupuestos ya definitivamente modificados y aprobados, bien formando mas de un adicional, bien solicitando y obteniendo transferencias de crédito, que no es posible autorizar en un régimen económico tan complicado por el número considerable, y la diversidad de condiciones de los centros provinciales y municipales que lo constituyen. Hasta aqui se ha fundado el abuso en la sobra anticipacion con que se formaban y remitian á la aprobacion del Ministerio ó de los Gobiernos de provincia los presupuestos ordinarios; pero ahora que el plazo señalado para la remision de los adicionales de resultas y nuevos gastos permite examinar y reformar casi á la mitad de su ejercicio cada presupuesto ordinario, de modo ninguno puede disculparse la formacion de segundos adicionales, ni pueden autorizarse las transferencias de crédito a no ser que sucesos realmente extraordinarios y notoriamente excepcionales den motivo bastante para ello.

Señalados ya á la atencion de V. S. estos dos puntos esenciales, réstale á la Direccion encargar á su celo el exacto cumplimiento de las prevenciones siguientes:

1.º Antes del 1.º de junio se servirá V. S. remitir á esta Direccion el presupuesto adicional de la provincia y los adicionales de los Ayuntamientos que deba aprobar el Gobierno; y para el 15 del mismo mes dará V. S. cuenta del estado en que se halle en la provincia de su mando, la presentacion de los adicionales que á V. S. compete aprobar, segun las disposiciones vigentes.

2.º Con arreglo á lo prevenido en el art. 14 de la Real orden circular de 30 de julio de 1859, el presupuesto adicional de cada año comprenderá ordinariamente las resultas por ingresos y gastos del presupuesto anterior y los gastos nuevos que sea conveniente incluir en el ordinario que se ejercita; y en el caso de que no ha ya nuevos gastos que incluir, ni resultas del presupuesto anterior á que atender, se formarán de todas suertes las liquidaciones de gastos y de ingresos las cuales se remitirán á este Ministerio con una certificacion que acredite que quedan satisfechas todas las obligaciones y realizados todos los ingresos del ejercicio vencido. Con estos documentos se justificará el enlace del período administrativo que se cierra con el del ejercicio corriente.

3.º El adicional de nuevos gastos comprenderá siempre los ingresos adicionales necesarios, y además las transferencias de crédito, y cuanto altere las cifras aprobadas ya en el ordinario, á fin de que el pre-

supuesto, después de hecha la refundicion, quede ó nivelado, ó consubstante. Al efecto será necesario practicar un estudio concienzudo y previsor que dé por consecuencia en su dia la mayor conformidad posible entre el presupuesto y la cuenta, lo cual se conseguirá incluyendo solo en cada ejercicio los gastos que puedan satisfacerse con los recursos realizables en él y separando de los ingresos calculados la parte de ellos que pueda ser por cualquier motivo ilusorio.

4.º El adicional de resultas en la parte de gastos constará de una relacion que comprenda todas las obligaciones cumplidas y servicios realizados y no satisfechos en el presupuesto anterior al cerrarse definitivamente los pagos en 31 de marzo, á la cual se unirá como comprobante de las cifras ocurridas en los pagos, la liquidacion general de gastos. Como V. S. observará, no hay en el modelo de esta liquidacion casilla para lo pagado de mas en los artículos del presupuesto provincial y las partidas ó artículos del municipal, porque con arreglo á las disposiciones vigentes, no es de abonar cantidad alguna que exceda de los créditos autorizados. Cuando por causas inevitables ocurra sin embargo cualquiera exceso de gasto, se instruirá sobre ello expediente particular en la forma que determina el art. 18 de la precitada Real orden de 30 de julio, y se unirá este expediente á la cuenta general para que en él recaiga la resolucion oportuna.

5.º El adicional de resultas en la parte de ingresos constará de una relacion de los créditos que estén sin realizar en 31 de marzo, y que se consideren cobrables, á la cual se unirá como comprobante la liquidacion general de ingresos. Tambien se unirá á aquella como comprobantes de la existencia en arcas, que ha de formar el primer artículo ó partida de ingresos por resultas, las certificaciones de las actas de arqueo celebradas en 31 de diciembre y en 31 de marzo. La comparacion entre lo pagado y lo recaudado en las dos fechas citadas, servirá de base á la comprobacion de las existencias en arcas que deben dar desah las certificaciones. Solo pasará al adicional para refundirse con el ordinario la cantidad que resulte de la certificacion del arqueo practicado en 31 de marzo.

6.º El adicional de nuevos gastos comprenderá en sus lugares respectivos los créditos ó partidas que alteren las cifras aprobadas en el ordinario, debiendo referir unos y otras á las relaciones numeradas en que se detallarán con claridad las cantidades pedidas por adicion para cada servicio. La Direccion remitirá en breve á V. S. suficiente número de ejemplares de presupuestos provinciales y municipales, con arreglo á un nuevo modelo, á fin de que se utilicen en los adicionales que van á formarse las modificaciones que ha creido conveniente introducir en su redaccion y estructura.

7.º Se oirá precisamente sobre los créditos ó partidas que alteren en el adicional las cifras del presupuesto ordinario á las Diputaciones y Ayuntamientos, segun los casos, con el fin de que discutan y voten los nuevos gastos. De los acuerdos de las Corporaciones acerca de este punto se extenderán certificaciones que se unirán al presupuesto adicional, lo mismo que se practica en el ordinario; y al trasladar á los Ministerios respectivos los capítulos ó relaciones que comprendan servicios de su competencia, tendrán especial cuidado los Gobernadores, para cumplir con el artículo 9.º de la Real orden antes citada, de acompañar copia de estos acuerdos, á fin de que pueda tenerse en cuenta la opinion de dichas Corporaciones. De haber llenado los Gobernadores esta prescripcion darán conocimiento á este Ministerio al remitir los presupuestos ordinarios ó los adicionales.

8.º Para demostrar que está bien formado el adicional, y que en la refundicion se presenta el presupuesto municipal ó ni-

velado ó con sobrante, segun está prevenido, se acompañará á aquel por separado y sin relaciones unEMPLAR IMPRESO, reproducido ya y en los términos mismos en que su aprobacion se solicita. Del presupuesto provincial se remitirá solo un resumen por capítulos.

9.º Para evitar, segun está dispuesto, las alteraciones de las cifras del presupuesto en lo que resta de ejercicio después del 1.º de junio, que es cuando deben ya estar formados los adicionales, se aumentará en estos, con la debida prevision, el capítulo de imprevistos, á fin de que el basto á cubrir los gastos nuevos que ocurran fuera de consignacion, y cualquiera otro exceso de corta entidad sobre los créditos aprobados. Cuando un Gobernador solicite autorizacion para hacer algun gasto por cuenta de este capítulo, se servirá determinar la cantidad que de él pretenda invertir en la inteligencia de que no podrá tener efecto de otra manera la autorizacion pedida.

10.º Con el objeto de que figuren entre los datos estadísticos de la Direccion, reclamarán los Gobernadores de todos aquellos Ayuntamientos que gasten mas de 100,000 rs. una copia íntegra de las liquidaciones generales de gastos é ingresos de los presupuestos, y las remitirán á este Centro directivo al tiempo de aprobar por su parte los presupuestos adicionales.

Lo digno todo á V. S. para los efectos oportunos, acompañando á esta circular los modelos de las liquidaciones de gastos é ingresos provinciales y municipales que quedan mencionados, y encargándole la inmediata publicacion de ella en el Boletín oficial de esa provincia.

Lo que se inserta en este periódico para su debida publicidad y puntual cumplimiento por parte de los señores Alcaldes á quienes con esta fecha se remiten los correspondientes ejemplares de los modelos de liquidaciones á que se refiere la antecedente circular, que espero observarán en todas sus partes, sin dar lugar á recuérdos ni apremios medidas en un servicio tan importante como el de que se trata. Orense 27 de marzo de 1860. —El Gobernador, Hermenegildo Guilian

Circular Núm. 188.

Seccion 6.ª—Negociado único—Hacienda

Se dictan reglas para regularizar las operaciones que deben verificarse por consecuencia de las reducciones del servicio militar, armonizándolas con el espíritu que preside en el reglamento provisional de 1.º de enero último dictado para la ejecucion de la ley de 29 de noviembre del año anterior.

Las Direcciones generales del Tesoro, de Contabilidad de la Hacienda pública y de la Caja general de Depósitos, con fecha 15 del actual me dice lo que sigue:

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á estas Direcciones generales, con fecha 23 de febrero último, la Real orden siguiente:

«Excmo. Sr.: Conformándose la Reina con las observaciones expuestas por las Direcciones del Tesoro, Contabilidad y de la Caja de Depósitos, acerca de la necesidad de regularizar las operaciones que deben practicarse por consecuencia de las reducciones del servicio militar, armonizándolas con el espíritu que preside en el reglamento provisional de 1.º de enero último, dictado para la ejecucion de la ley de 29 de noviembre del año anterior, se ha dignado aprobar las siguientes reglas:

1.ª Las cartas de pago procedentes de las cuotas recibidas en las sucursales

de la Caja de Depósitos, antes de serles comunicada esta Real orden, y que por consiguiente hayan ingresado con abono al fondo de redenciones, se formalizarán en la Caja general de Depósitos, ingresando por su importe en concepto de depósito y contribuyendo a la cuenta con el Consejo de Administración por el fondo de redenciones, a cuyo favor se expedirán las equivalentes cartas de pago. Las expresadas cartas de pago, recogidas, se darán después de canceladas en concepto de traslación de caudales a las sucursales que las expidieron. La Dirección general de la Caja de Depósitos comunicará las órdenes oportunas a los Tesoreros para que consideren sin efecto los abonos hechos al fondo de redenciones por el ingreso de las expresadas cuotas, salden las cuentas que en este concepto hayan abierto, y al formar las que rijan al Tribunal se carguen de los ingresos expresados como traslaciones de caudales de la Caja general de Depósitos, anotando en este concepto los asientos de su contabilidad.

2.º En lo sucesivo, el ingreso de las cuotas de redención que, según el artículo 19 del reglamento provisional de 1.º de enero del corriente año debe hacerse en las Cajas sucursales de las provincias, se verificará por cuenta y como traslación de caudales de la general de Depósitos.

3.º Las sucursales pasarán a las Cajas de las Tesorerías las mismas cuotas como se hace con los depósitos comunes, cargándose dichas Tesorerías como recibidos de la Caja de Depósitos en la cuenta corriente con la misma.

4.º La Caja general de Depósitos, conforme al art. 4.º del reglamento antes citado, ingresará las cartas de pago que le remita el Consejo de Administración del fondo de redenciones, abonando su importe al mismo en cuenta como depósito necesario, y se dará de ellas en concepto de traslación de caudales a las sucursales, justificando el libramiento de esta operación con las mismas cartas de pago de las sucursales previamente canceladas.

5.º Las cuotas de redención que los interesados entreguen en la Caja central de Depósitos podrán ingresar desde luego en concepto de depósito y con abono a la cuenta con el Consejo por el fondo de redención, omitiéndose en este caso la formalización de las cartas de pago de esta procedencia que el mismo Consejo pasa a la Caja con arreglo al art. 4.º La operación se limitará en este caso a cancelar aquellas por un solo documento que sirva de resguardo al Consejo y de crédito en la cuenta con la Caja.

6.º Centraliza la por efecto de las reglas que anteceden la cuenta del fondo de redenciones a disposición del Consejo de Administración en la Caja general de Depósitos, quedará asimismo centralizada en ella la liquidación y pago de los intereses que al mismo fondo correspondan. Las cartas de pago que la Caja general de Depósitos expida a favor del Consejo, deberán respaldarse por regla general con el pormenor de las que este entregue, y contener la indicación de los días en que empieza el abono de los intereses.

7.º El pago de todas las cantidades que el Consejo de Administración e inversión del fondo de redenciones necesite en las provincias para cubrir las obligaciones afectas al mismo, cualquiera que sea su naturaleza, se hará únicamente por medio de letras o libranzas que ex-

pedirá la Dirección de la Caja general de Depósitos a cargo de sus sucursales. A la presentación de estos giros, las Tesorerías pasarán a las sucursales la cantidad equivalente en metálico con cargo a la cuenta general de la Caja de Depósitos y en iguales términos que se verifica ordinariamente para las atenciones de la misma. Las sucursales se cargarán del metálico con abono a la cuenta corriente que llevan en las Tesorerías, y satisfarán los giros dándolos en sus cuentas bajo el concepto especial de giros de la Caja general de Depósitos, omitiendo los originales después de cancelados como comprobantes a las mismas cuentas.

8.º Los giros que según la regla anterior debió expedir la Dirección general de la Caja de Depósitos después de intervenidos por la Contaduría de la misma y de anotados en el correspondiente registro, tendrán formal ingreso en su Tesorería en concepto de giros de la Dirección de la Caja de Depósitos a cargo de sus sucursales. La entrega de estos giros al Consejo de Administración e inversión del fondo de redenciones, se hará con las formalidades de instrucción, considerándose como efectivo, y cargándose en la cuenta con el Consejo por el fondo de redenciones.

9.º La Dirección de la Caja general de Depósitos dará con cimiento a la del Tesoro con la anticipación necesaria, de los giros que expida a cargo de sus sucursales a fin de que esta pueda adoptar en su caso las disposiciones convenientes a la situación material de fondos.

10.º Los fondos que el Consejo de Administración del fondo de sustituciones necesite en Madrid, le serán entregados en metálico en la Caja central de Depósitos, que a su vez los recibirá de la Tesorería central en los términos establecidos.

De Real lo digo a V. E. para su cumplimiento y efectos correspondientes.

Lo que estas Direcciones trasladan a V. S. para su más exacto cumplimiento por parte de las oficinas de esa provincia a quienes corresponde.

Lo que se hace público por medio de este periódico oficial para su puntual cumplimiento. Orense marzo 22 de 1860.—El Gobernador, Hermenegildo Guillán.

CUARTA SECCIÓN.

Juzgado de paz de Allariz.

Don José Conde, secretario interino del juzgado de paz de la villa de Allariz.—Certifico: que en dicho juzgado pendía expediente de juicio verbal a instancia del Licenciado don Ricardo Rodríguez Arias, abogado y vecino de esta villa, contra Francisco Fernandez de la Portela de Magarelos en este municipio en rebeldía, sobre reclamación de 71 rs. y dos ferrados de fruto en especie, en el que recayó la sentencia que dice:

«En la villa de Allariz a 5 de marzo de 1860 el Licenciado don Pedro Martínez Santos, juez de paz de la misma:

«Visto el precedente juicio verbal, por ante el secretario interino, dijo:

Resultando que el Licenciado don Ricardo Rodríguez Arias de esta vecindad propuso demanda para que Francisco Fernandez de la Portela de Magarelos en este municipio, le pague 71 rs. que le adeuda por atrasos de arriendo de la tierra de Labadoiro, en términos de dicho pueblo, con más dos ferrados de fruto en especie del año próximo pasado:

Resultando que citado por cédula el

demandado y no habiendo concurrido en el día y hora señalado para el juicio, fué declarado rebelde con arreglo al artículo 1.º 173 de la Ley.

Resultando que el demandante justificó con tres testigos sin excepción alguna que el demandado llevó en arrendamiento la finca de su propiedad a la denominación de Labadoiro, y que por ella le pagaba dos ferrados de grano:

Considerando que el demandado no habiéndose presentado al juicio y a prestar en él el juramento no diferido que se pidió en la papeleta por el demandante, quedó por confeso según el art. 297 de la Ley de Enjuiciamiento:

Y considerando plenamente justificada la demanda además por la prueba testimonial:

Falla: que debia de condenar y condena al demandado a que dentro de seso día pague al demandante la cantidad y especie reclamada con todas las costas causadas y que se causen hasta hacer efectivo el pago por la vía de apremio si no cumpliera dentro de dicho término; y manda que esta sentencia por la rebeldía del demandado sea notificada en los estrados del juzgado por edictos a la puerta del local del mismo, y en el Boletín oficial de la provincia, para lo que se expida testimonio. Por esta su sentencia definitiva así lo pronuncia, manda y firma, de que yo el secretario certifico.—Pedro Martínez Santos.—José Conde, secretario interino.

Y para que tenga efecto la inserción en el Boletín oficial de esta provincia la anterior sentencia, expido el presente que firmo previo el visto bueno del señor Juez de paz, estando en Allariz a 9 de marzo de 1860.—José Conde, secretario interino.—V. B.º, Pedro Martínez Santos.

QUINTA SECCIÓN.

COMISION PRINCIPAL

DE VENTAS DE BIENES NACIONALES
de la provincia de Orense.

La Junta superior de Ventas en 15 del actual, aprobó los remates de las fincas que a continuación se expresan en conformidad a lo dispuesto en el caso 5.º del artículo 96 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855 y con arreglo al 157 de la misma, se publica esta resolución y se encarga a los Sres. Alcaldes de los respectivos distritos a que pertenece cada interesado, se lo haga saber a fin de que verifique el pago correspondiente en la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado de esta provincia o en Madrid dentro del plazo de quince días, evitando la quiebra que en otro caso es consiguiente.

Bienes de Beneficencia.

	Rs. vn.
Una casa llamada de Outeiro.—Don Benigno Sarmiento, de Punjin.	7,600
Un viñado sito en Punjin, Outeiro.—Don José Benito Covelo, de Carballino.	6,000
En monte peñascal, sito en Punjin.—Don Benito Rodríguez, Freas de Maside.	540
Un monte bajo con un castaño, término de Rubian.—El mismo.	100

Orense 24 de marzo de 1860.—E. G. I., Angel M. Lozano.

SETIMA SECCION.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE LUGO.

Policia urbana.

Por consecuencia de no haberse presentado don Luis Géspedes a tomar

posesión de la plaza de arquitecto de esta provincia, para cuyo destino había sido nombrado por Real orden de 29 de noviembre del año último, y en cumplimiento de lo que S. M. la Reina (D.ª) se ha servido disponer en 14 del corriente, se anuncia la nueva vacante de la referida plaza, dotada con el haber de 12,000 reales vellón anuales y la habilitación señalada por el art. 11 del Real decreto de 1.º de diciembre de 1858, a fin de que los arquitectos que quieran optar a ella, presenten en este Gobierno de provincia las oportunas solicitudes durante el término de un mes, que al efecto he acordado señalar, y que habrá de contarse desde el día de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia y Gaceta de Madrid, debiendo acompañarlas los títulos y documentos correspondientes.

Lugo 20 de marzo de 1860.—Rafael Huidobro, secretario interino.

Ayuntamiento de Nogueira.

Se acuerda en pública subasta la nueva construcción de dos pontilinos de San Miguel de la Barca y Vilur, en las expresadas arroyos, cuyo remate tendrá efecto ante este Ayuntamiento el día 25 del abril próximo. Los maestros canteros que quieran interesarse en este remate se presentarán en la Junta y sala de sesiones, en cuyo día se pondrán de manifiesto el plano y condiciones, bajo las que se hayan de construir.

Nogueira marzo 22 de 1860.—El Alcalde, José Rodríguez Vega.—Por acuerdo de la corporación, Juan Antonio Rodríguez, secretario.

SECCION DE ANUNCIOS.

DE CENTINELA
DE LOS SECRETARIOS.

Periodico de Administración municipal y de interés público para los Ayuntamientos, sus Secretarios, Juntas locales y Juzgados de Paz.

Se publica en Zaragoza tres veces al mes en los días 1.º, 16.º y 20.º. Consultas gratis a los suscritores.—Se reparte por separado todos los meses un pliego de tarifas para aplicar el tanto por 100 en los repartimientos.

Las oficinas están establecidas en la calle de San Pablo y San Anton, sin número, principal de la derecha.

La suscripción es anual y el precio el de 40 rs. anticipado el pago por trimestres en poder del Administrador en metálico, letra de fácil cobro, o en sellos de correos de cuatro cuartos, aumentando en este caso el 3 por 100.—Director D. Manuel Cándido Reinoso, Licenciado en jurisprudencia y Secretario del Excmo. Ayuntamiento de dicha capital. Secretario Administrador, D. Leandro Rallo, su fundador y Secretario que ha sido de Ayuntamiento.—Colaboradores.—D. Ponciano Alberola, doctor en jurisprudencia y ex decano del ilustre colegio de abogados de esta ciudad.—Don Juan Domingo Ambrojo, Licenciado, abogado de dicho colegio.—D. Gerónimo Martínez, Licenciado en jurisprudencia y empleado cesante.—D. Saturnino Penen, Licenciado, abogado de dicho colegio y vocal supernumerario del Consejo de esta provincia.—D. Juan Pueyo, Licenciado en Administración y jurisprudencia y abogado de dicho colegio.

IMPRENTA DE D. CESAREO PAZ Y H.